

14ª REUNION — Continuación de la 11ª SESION ORDINARIA — JULIO 5 DE 1984

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Roberto Pascual Silva y Adam Pedrini

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Oscar Tupic
ACEVEDO de BIANCHI, Carmen B.
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBARRACÍN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor H.
ALVAREZ, Adrián Carlos
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARÁOZ, Julio César
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBEITO, Juan Carlos
BASUALDO, Héctor Alfredo
BECERRA, Carlos Armando
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tullio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BONOMI, Nora Susana
BORDON GONZÁLEZ, José Octavio
BOTTA, Felipe Esteban
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BRIZ DE SÁNCHEZ, Onofre
BULACIO, Julio Segundo
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOPA, Ramón Héctor Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos

CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
COLOMBO, Ricardo Miguel
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORPACCI, Sebastián Alejandro
CORTESE, Lorenzo Juan
CORTINA, Julio
CORZO, Julio César
CHEHIN, Jorge Víctor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE LA VEGA DE MALVASIO, Lily M.
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ DE AGÜERO, Dolores
DÍAZ LECAM, Juan Antonio
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DONAIRES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco Carmelo
FALCIONI de BRAVO, Ivelise Ilda
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FERRE, Carlos Eduardo
FIGUEROA de TOLOZA, Emma
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Anibal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARCÍA, Antonio Matías
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina
GONZÁLEZ, Arnaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Jerónimo
GONZÁLEZ, Raúl Héctor
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás Walther
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos María

GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTTI, Erasmo Alfredo
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIÉRREZ, Reynaldo Pastor
GUZMÁN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
IMBELLONI, Norberto
INGARAMO, Emilio Felipe
JAILLE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Ángel
LANDÍN, José Miguel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Arnaldo Efraín
LEALE, Zelmán Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Enerio
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARCHESINI, Víctor Carlos
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTÍNEZ, Valentín del Valle
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel José
MARTÍNEZ MARTINOLI, Fausta-G.
MASINI, César Francisco
MASTOLORENZO, Vicente
MATUS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldito
MELÓN, Alberto Santos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MILANO, Raúl Mario
MINICHILLO, Juan José
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERRAT, Miguel Pedro
MONTERO, Carlos Lucio

MORAGUES, Miguel José
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOSSO, Alfredo Miguel
 MOTHE, Félix Justiniano
 NADAL, Marx José
 NEGRI, Arturo Jesús
 NIEVA, Próspero
 PALEARI, Antonio
 PAPAGNO, Rogelio
 PATINO, Artemio Agustín
 PECHE, Abdol Carim Mahomed
 PEDRINI, Adam
 PELÁEZ, Anselmo Vicente
 PEPE, Lorenzo
 PEREYRA, Pedro Armando
 PEREZ, Bené
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 PLANELL, Mariano Juan
 PRADO, Leonardo Ramón
 PRONE, Alberto Josué
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RABANAL, Rubén Francisco
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RADONJIC, Juan
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REGGERA, Esperanza
 REYNOSO, Adolfo
 RIGATUSO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix

RIUTORT de FLORES, Olga Elena
 ROBERTO, Mario
 ROBSON, Anthony
 RODRIGUEZ, Antonio Abel
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Manuel Alberto
 RODRIGUEZ, Pedro Salvador
 RODRIGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROMANO, Domingo Alberto
 ROMERO, Antonio Elías
 ROMERO, Francisco Telmo
 RUBIO, Luis
 RUIZ, Angel Horacio
 RUIZ, Osvaldo Cándido
 SABADINI, José Luis
 SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SARUBI, Pedro Alberto
 SCIURANO, Adolfo
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Roberto Pascual
 SILVERO, Leandro Antonio
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOCCI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBBIN, Adolfo Luis
 STUBBIN, Marcelo
 SUAREZ, Lionel Armando
 TABASCO, Oscar

TAIBO, Nicolás
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TOSI, Santiago D.
 UREIZA, Luis María
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 VISTALLI, Francisco José
 VON NIEDERHAUSERN, Norberto B.
 YAMAGUCHI, Jorge Rokuro
 ZAVALEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABDALA, Luis Oscar
 ALVAREZ, Roberto Pedro
 BRIZUELA, Juan Arnaldo
 CABELLO, Luis Victorino
 CASSIA, Antonio
 COSTARELLI, José
 GRIMAU, Arturo Aníbal
 LÓPEZ, Santiago Marcelino
 PINTOS, Carlos María Jesús
 SCELZI, Carlos María
 TORRES, Carlos Martín
 UNAMUNO, Miguel

AUSENTES, SIN AVISO:

ABBATE, Alejandro Abel Alberto
 BARBARO, Julio
 ORGAMBIDE, Luis Oscar
 PONCE, Rodolfo Antonio

SUMARIO

1. **Moción del señor diputado Jaroslavsky** de que se aplaze la consideración en particular del proyecto de ley sobre régimen de las locaciones urbanas en general y promoción de las de vivienda. Se aprueba. (Pág. 2058.)
2. **Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales** en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre protección del orden constitucional y de la vida democrática. Se aprueban parcialmente las enmiendas introducidas por el Honorable Senado. (Página 2059.)
3. **Consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se restablece el gravamen sobre fletes de transporte internacional de exportación e importación con destino al Fondo Nacional de la Marina Mercante. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 2082.)
4. Continúa la **consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Vivienda y de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de las locaciones urbanas en general y promoción de las de vivienda. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 2087.)
5. **Mociones del señor diputado Balestra** de vuelta a comisión del dictamen de las comisiones de Relacio-

nes Exteriores y Culto y de Energía y Combustibles en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía, y del señor diputado Jaroslavsky de que se levante la sesión y se postergue para la próxima sesión de tablas el tratamiento de los asuntos pendientes de consideración. Se aprueban ambas mociones. (Pág. 2106.)

6. Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2106.)

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de julio de 1984, a la hora 18 y 50:

1

MOCION

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.
Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: debido a que diversos artículos del proyecto de ley sobre locaciones urbanas están siendo analizados por las comisiones respectivas, hago moción de que

esto es, que promueva adecuadamente las construcciones navales en nuestro país. De lo contrario, podría ocurrir que nadie dispusiese esos fondos, ni siquiera "Rentas generales"; quedarían depositados en la cuenta que a este fin se instrumente en un banco, ociosos y sin ningún tipo de utilidad no sólo para la Marina Mercante sino para toda la Argentina.

Creo que esta explicación aventala la preocupación que animó sanamente al señor diputado Melón a hacer el reparo pertinente.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: solicito que la Cámara pase a un breve cuarto intermedio en las bancas a efectos de considerar la propuesta realizada por la bancada mayoritaria, en razón de que ésta ha surgido con posterioridad al estudio efectuado por las comisiones.

Sr. Rabanal. — No tenemos inconveniente en que se pase a un breve cuarto intermedio para analizar la propuesta que he formulado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si hay asentimiento, se pasará a un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en el recinto.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — Señor presidente: luego de un cambio de opiniones hemos acordado la siguiente redacción para el nuevo artículo propuesto: "Cuando en el Fondo Nacional de la Marina Mercante existan fondos no comprometidos, éstos podrán ser transferidos a «Rentas generales» por disposición del secretario de Transporte, luego de cumplimentar los planes en materia de construcciones navales".

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si se aprueba como artículo 3º el texto que acaba de ser leído por el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley ¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

4

LOCACIONES URBANAS

(continuación)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: los integrantes de las comisiones hemos concluido la labor de análisis del articulado del proyecto de ley sobre locaciones urbanas en general y promoción de las de vivienda, razón por la cual la Honorable Cámara está ya en condiciones de iniciar la consideración en particular del asunto.

Anticipo por otra parte que como resultado de la labor mencionada, las comisiones han acordado propiciar diversas modificaciones en los artículos que integran su dictamen. En consecuencia, al considerarse cada artículo correspondería que se dé lectura por Secretaría del texto que proponen las comisiones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si hay asentimiento, se procederá en la forma solicitada por el señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

Artículo 1º — Instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza.

En todos los supuestos los alquileres se establecerán en moneda oficial de circulación forzosa al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal o equivalente. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: sin perjuicio de entrar en el artículo 1º, voy a solicitar a la

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2115.)

Presidencia que se llame a los señores diputados que puedan estar presentes en la casa, para que se acerquen al recinto.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Cuál es la razón, señor diputado?

Sr. Terrile. — Porque tengo entendido, señor presidente, que hay varios señores diputados que están en la casa, pero no en el recinto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Es cierto, señor diputado, pero debe tener en cuenta que existe quórum, y que no estamos votando.

Sr. Terrile. — Señor presidente: merced a una sugerencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a una consulta que se hizo con autoridades del Banco Central, en el segundo párrafo del artículo 1º que dice: "En todos los supuestos los alquileres se establecerán en moneda oficial de circulación forzosa", proponemos sustituir la expresión "moneda oficial de circulación forzosa" por "moneda de curso legal".

Por otra parte, con respecto a la frase que dice "la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal o equivalente", solicitamos que se supriman los términos "o equivalente".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Señor presidente: adelanto el voto negativo de nuestra bancada con respecto a este artículo y a todos los artículos de este proyecto de ley de locaciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Entiendo que lo expresado por el señor diputado Terrile arroja claridad. Moneda de curso legal es la moneda corriente, en la que debe transarse toda operación que se efectúe en materia de alquileres.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Señor presidente: nos oponemos a dos de los conceptos que establece este artículo. En primer lugar, si el contrato no ha sido celebrado por escrito, el hecho de que una autoridad judicial determine el precio y su actualización, en opinión de muchas personalidades que han estudiado el tema y de diversas cámaras y entidades va a facilitar la invasión de intrusos, que luego podrán hacer dificultosa la prueba de que no han sido locatarios sin contrato. Es decir que en este tema nos oponemos de plano porque advertimos que será motivo de muchas injusticias.

En cuanto al otro aspecto, dentro de la libertad de contratación deberíamos dejar a las par-

tes que establezcan en qué moneda quieren contratar. Lo que ocurre en el país desde hace mucho tiempo es que no se usa la moneda de curso legal —que a nuestro entender es la que debería usarse— porque la gente no le tiene confianza.

Como esta situación ha sido heredada por el actual gobierno, nosotros no queremos abundar en un tema sobre el cual hemos expuesto reiteradamente. Pero el día en que la moneda argentina vuelva a ser confiable, a los primeros que les va a convenir realizar sus operaciones en esta moneda será a los argentinos. Como en definitiva es un bien de cambio, referirse al dólar es someterse a la posibilidad de que un día ese valor fluctúe según circunstancias que no pueden ser manejadas en este país.

De modo que en un país tranquilizado, con su economía ordenada y con la moneda en situación de estabilidad, los contratos se harán naturalmente en moneda de curso legal.

Pero excedemos nuestra capacidad de legislación e invadimos ámbitos de decisión de los individuos que actúan en el sector privado cuando por vía legislativa pretendemos forzarlos a actuar de una manera determinada, a pesar de que, a lo mejor, prefieren hacerlo de otra forma.

Por los motivos expuestos no vamos a votar favorablemente este artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si ningún otro señor diputado hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º conforme al texto del que se ha dado lectura por Secretaría y con las modificaciones de las que ha informado el señor diputado Terrile.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 2º.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

Art. 2º — *Plazos.* Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda, con o sin muebles, será de dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos.

Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados.

Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se refiere la presente ley:

- a) Las contrataciones para sedes de embajadas y consulados, así como también las destinadas a personal diplomático y consular;

- b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo en zonas aptas para tal fin. Cuando el plazo del alquiler supere los seis meses, se presumirá que el contrato no es con fines de turismo;
- c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos u otros objetos y los garajes y espacios que formen parte de un inmueble destinado a vivienda u otros fines y que hubieran sido locados, por separado, a los efectos de la guarda de animales, vehículos u otros objetos;
- d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias;
- e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes autárquicos sean parte como inquilinos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Deseo proponer a la Honorable Cámara un agregado en el inciso a) de este artículo.

A continuación de: "las contrataciones para sedes de embajadas y consulados...", propongo agregar: "y organismos internacionales".

Más adelante, donde el mismo inciso dice: "... así como también las destinadas a personal diplomático y consular", propongo agregar: "o perteneciente a dichos organismos internacionales".

Asimismo, en el inciso b), donde dice: "... en zonas aptas para tal fin ...", sugiero sustituir esa expresión por la siguiente: "en zonas aptas para ese destino".

Sr. Presidente (Pugliese). — En el caso de que la Honorable Cámara acepte el agregado propuesto por el señor diputado al inciso a), correspondería suprimir la conjunción "y" que figura entre las palabras "embajadas" y "consulados" y reemplazarla por una coma.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Deseo proponer una modificación en cuanto al plazo mínimo que fija el proyecto para las locaciones con destino a vivienda. Concretamente, solicito que ese plazo sea de tres años, al igual que para los restantes destinos.

Precisamente, el objetivo principal tenido en cuenta para sancionar una ley de alquileres fue tratar en lo posible de solucionar el problema de las locaciones con destino a vivienda. Considero que puede ser perfectamente razonable este término de tres años como mínimo para que el locatario no sufra la angustia de encontrarse, en un breve lapso, frente al problema de una nue-

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la Comisión la modificación propuesta por el señor diputado Deballi?

Sr. Terrile. — Señor presidente: uno de los fundamentos que expusimos ayer al argumentar en general fue precisamente que este proyecto distingue entre dos alternativas u opciones: una es la contemplada por el Código Civil y otra la establecida por el régimen de promoción. El proyecto procura alentar el régimen de promoción para que el inquilino tenga así la opción entre un sistema y otro; y por ello una de las condiciones establecidas es la elevación del plazo a tres años.

En tal sentido nos oponemos a que en las disposiciones generales sea introducido el mínimo de tres años, que por supuesto vamos a mantener exclusivamente para el régimen de promoción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — El cambio de plazo quita flexibilidad a la norma.

Baste suponer simplemente el caso de legisladores cuyo mandato haya sido de sólo dos años, cuya situación en caso de tener que alquilar un inmueble en esta ciudad ya no entraría en lo que estamos legislando.

En la vida moderna suele ser conveniente que en toda la actividad comercial se disponga de los mecanismos más flexibles, y no por el contrario procurar incrementar su rigidez.

Sr. Presidente (Pugliese). — La comisión ya se ha expedido con respecto a los plazos.

Se va a votar el artículo 2º del dictamen, con las modificaciones propuestas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 3º.

Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

Artículo 3º — Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse los índices que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Solicito de la comisión quiera tener a bien admitir un cambio en la denominación del organismo cuyos datos se habrán de tomar en cuenta como base para el ajuste de los arrendamientos.

Hay provincias que tienen su propio instituto, y los índices estadísticos de precios, salarios, etcétera que suelen utilizarse para las actualizaciones no son los mismos en esas jurisdicciones que en la Capital Federal.

Por ello, con todo respeto, solicito que la comisión acepte la inclusión de los entes provinciales de estadística.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Baglini. — La sugerencia del señor diputado Stolkiner habrá de permitir una mejor adaptación de los sistemas de ajuste locativo a las características regionales, pues es cierto que hay una distinta incidencia de la situación inflacionaria según las provincias.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia solicita al señor diputado por Córdoba se sirva concretar su propuesta.

Sr. Stolkiner. — Con mucho gusto, señor presidente.

El primer párrafo del artículo 3º quedaría redactado de la siguiente manera: "Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de estadística y censos de la Nación y de las provincias".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Su propuesta es alternativa? ¿Puede usarse cualquiera de los dos o solamente uno?

Sr. Stolkiner. — La alternativa se deja librada a la voluntad de las partes, dentro del principio de la libertad de contratación que admite el artículo 1.197 del Código Civil, cuando en determinada circunstancia deban remitirse al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero también se faculta a las partes, por las razones que expuso el señor miembro informante de la comisión, a que tomen en cuenta los índices oficiales de las provincias donde existan dichos institutos.

Por otro lado, señalo que esto contribuye a una mejor interpretación del federalismo que informa a nuestras instituciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — La aclaración era importante por el carácter imperativo de la norma.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Señor presidente: por medio de esta disposición se puede optar por el índice de costo de vida o por el del incremento de los materiales de construcción. Estos últimos no tienen un ajuste mensual en la misma proporción, lo cual se puede advertir respecto del precio

de la cal, la pintura o el hierro. Es decir, esta situación se podría prestar a confusión o especulación entre las partes contratantes. Sería más clara la disposición si se dejara solamente el primer párrafo, con la modificación propuesta por el señor diputado preopinante, para eliminar cualquier posible discusión a que daría lugar la aplicación del índice de los materiales de la construcción en oportunidad del reajuste.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: debemos tomar en cuenta que estamos considerando el capítulo referente a disposiciones generales del proyecto, que comprende no sólo las locaciones destinadas a vivienda, sino también las referidas a todos los ramos comerciales.

El artículo en análisis determina en su segundo párrafo que "... serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado". Vale decir, se trata de una posibilidad sumamente más amplia que la interpretación del señor diputado, quien se ha limitado exclusivamente al valor de los materiales de construcción.

Si el negocio fuera textil existe una forma de determinar el valor mercadería y es lógico que la capacidad de solvencia del inquilino, para afrontar su canon de alquiler, se encuentra en íntima relación con el beneficio que provenga del ramo que explota.

Por ello, entendemos que debe mantenerse esta alternativa, es decir los índices oficiales publicados por los institutos de estadísticas y censos nacional o provinciales y el valor atinente a la mercadería que explota el inquilino.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — En relación con la propuesta del señor diputado Stolkiner, sobre la cual la Presidencia solicitó una aclaración, pienso que la cuestión se salvaría si se utilizara la conjunción "o" en lugar de la "y".

Sr. Presidente (Pugliese). — Es decir que se debería utilizar el índice nacional o el provincial, cualquiera de los dos. ¿Hay inconveniente, señor diputado?

Sr. Stolkiner. — En la redacción propuesta se utiliza la conjunción y no la disyunción. Creo que es más exacto. Mientras no se afecten intereses sociales debe respetarse el principio individualista. Por eso considero que sería perfectamente viable con la redacción propuesta por el diputado que habla, que se dejara deferida a las par-

tes la adopción del índice de ajuste proporcionado por el INDEC o por el Instituto de Censos de la provincia de Salta, por ejemplo. En este aspecto la amplitud dará mayor elasticidad a la ley y permitirá un juego más libre para la voluntad de las partes. No tengo inconvenientes en que se opte por lo segundo, pero creo que mi pensamiento se interpretará mejor —aunque no sé si es lo que quiere la Cámara— si se adoptara la conjunción y no la disyunción.

Sr. Presidente (Pugliese). — La comisión ha aceptado la modificación propuesta por el señor diputado Stolkiner, la que está a consideración de la Honorable Cámara.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — He solicitado la palabra simplemente para apoyar los términos de la proposición que acaba de presentar el señor diputado, la que considero acertada. En mi anterior intervención sólo me referí al segundo párrafo del artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por el señor diputado Stolkiner y aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 4º.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así:

Artículo 4º — *Fianzas o depósitos.* Las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito de garantía, al instrumentarse la locación, deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del contrato.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: vamos a solicitar un agregado en el subtítulo del artículo, que quedaría redactado de la siguiente forma: "Fianzas o depósitos en garantía".

Por otra parte, proponemos suprimir la parte que dice: "al instrumentarse la locación".

Asimismo, aclaro que con referencia al proyecto del Poder Ejecutivo, y siendo coherentes con lo establecido en el artículo 1º hemos sustituido la expresión "en moneda oficial de circulación forzosa" por "en moneda de curso legal".

De tal manera, ésta sería la redacción del artículo 4º: "Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fianza

o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del contrato al finalizar la locación".

Sr. Stolkiner. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Solicito a la comisión que en el nuevo texto propuesto se incorpore "moneda legal argentina".

Sr. Presidente (Pugliese). — Hay que utilizar la misma denominación en todos los artículos; no olvidemos la redacción del artículo 1º.

Sr. Stolkiner. — He presentado un proyecto sobre la necesidad de la moneda argentina en las transacciones sin desplazamiento de bienes en el país o del país al exterior. Esto es así porque las monedas son de curso legal aunque sean extranjeras.

En el país, señor presidente, la moneda a usar debe ser especificada como moneda nacional, ya que todas las monedas tienen curso legal.

Si bien es cierto que este proyecto de ley es para un territorio determinado, la Argentina, y debe implícitamente aceptarse que la moneda legal es la que circula en él, creo que la palabra que sugiero agregar, tipificando y adjetivando la moneda a usarse, no está de más porque no daña abundar sobre el particular.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Bodo. — Señor presidente: posiblemente haya que aclarar el concepto.

Es cierto que hay muchas monedas en circulación, pero la única moneda de curso legal en la República es el peso argentino. Hay otras monedas pero no son de curso legal sino de curso tolerado, que es otra calificación técnica diferente.

La ley se refiere aquí a la moneda de curso legal que tiene valor de cancelación forzosa de las obligaciones y de ninguna forma hace mención de otras que son de curso tolerado pero que no revisten el carácter de monedas de curso legal.

Por lo tanto soy de opinión de que debe mantenerse el texto tal como lo propone la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Omití, antes de conceder la palabra al señor diputado, preguntar a la comisión si acepta la propuesta del señor diputado Stolkiner.

Sr. Terrile. — La comisión no va a aceptar la propuesta del señor diputado Stolkiner por los

fundamentos que acaba de exponer el señor diputado Bodo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 4º con las modificaciones propuestas por la mayoría de la comisión.

—Resulta afirmativa

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 5º.

Se va a dar lectura por Secretaría.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dice así.

Artículo 5º — *Intimación de pago.* Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca será inferior a cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de pago.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — En este artículo proponemos que se amplíe el plazo de 5 días hábiles a 10 días, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Voy a proponer un agregado a este artículo para dar una mayor posibilidad de pago, ya iniciado el juicio de desalojo. El agregado sería el siguiente: "Iniciado el juicio de desalojo, y por única vez, podrá efectuar el pago dentro del término para contestar la demanda, con costas a su cargo".

Es decir que se le da una mayor amplitud a la posibilidad de pago llevándola hasta el momento de contestar la demanda dentro del ámbito judicial.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Baglini. — La comisión no va a aceptar, señor presidente.

El sistema que se ha propuesto en el proyecto implica una intimación previa a un procedimiento judicial, y en él la determinación de la suma adeudada es de cierta simpleza. Ampliar los plazos hasta el momento de contestar la demanda significa entrar, como en anteriores leyes que han tratado prórrogas de locaciones, a la consideración del problema de las costas y de los montos necesarios o suficientes para efectuar los depósitos, colocando en esta posición a un inquilino que ya ha tenido una oportunidad —ahora ampliada con la propuesta de modificación de la comisión— de poder regularizar su situación de pagos. Es decir que la comisión no acepta dado que entiende que esa modifica-

ción podría acarrear más inconvenientes que los beneficios que presuntamente tiene.

Sr. Terrile. — Señor presidente: quiero aclarar que los 10 días a los cuales se amplía el plazo deben ser corridos y no hábiles.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Quiero proponer que se mantenga la modificación tal como fue expuesta inicialmente por el señor diputado Terrile, es decir, que el plazo sea de 10 días hábiles tal como ocurre en toda operación bancaria o contractual. Es usual que se utilicen días hábiles y además se otorga de esta manera un lapso mayor a quien ha sido intimado a desalojar un inmueble, lo cual implica una mejor oportunidad para que pueda levantar la deuda contraída.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión la proposición del señor diputado por Neuquén?

Sr. Camisar. — La comisión no acepta la proposición porque entiende que el plazo de 10 días corridos es suficiente para la finalidad indicada. Por otra parte existe un problema de técnica legislativa, porque se trata de un plazo regulado en una ley de fondo que se incorpora al Código Civil y por lo tanto se debe hablar de días corridos y no de días hábiles.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 5º con la modificación propuesta por la mayoría de la comisión, consistente en sustituir los términos "cinco días hábiles" por "diez días corridos".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 6º.

Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 6º — *Periodos de pago.* El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan a periodos mensuales.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 7º.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 7º — *Pagos anticipados.* Para los contratos que se celebren a partir de la presente ley, no podrá requerirse del locatario:

- a) El pago de alquileres anticipados por periodos mayores de un mes;

- b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado;
- c) El pago del valor llave o equivalentes.

La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 8º.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 8º — *Resolución anticipada.* El locatario podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de canon locativo al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes locativo si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

Sr. Terrile. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Terrile. — Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar que se sustituya la expresión "canon locativo" por "alquiler", y que donde dice "un solo mes locativo" se establezca simplemente "un solo mes".

Sr. Deballi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Señor presidente: quiero proponer una modificación: elevar a doce meses el plazo de resolución anticipada, en lugar de establecerlo en seis meses como prevé el proyecto. Si bien este artículo le da derecho al locatario a una resolución anticipada, entiendo que ésta no puede ser ejercida antes de un período mínimo a efectos de que el locador pueda cubrir los gastos en que ha incurrido con motivo de la locación. Por eso propongo que el plazo se eleve a doce meses. Es decir, para tener derecho a una resolución anticipada el plazo mínimo de ocupación debe ser de un año.

Asimismo, como contrapartida de esta propuesta, solicito que también se modifique lo respectivo a la indemnización, eliminándola.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia desea saber si la comisión acepta las modificaciones propuestas por el señor diputado.

Sr. Terrile. — La comisión mantiene su criterio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 8º con las modificaciones propuestas por la mayoría de la comisión, consistentes en sustituir los términos "canon locativo" por "alquiler" y "mes locativo" por "mes".

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 9º.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 9º — *Continuadores del locatario.* En caso de abandono de la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 10. La comisión propone un nuevo texto en sustitución del incluido en el dictamen del que ha dado cuenta a la Honorable Cámara.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 10. — *Creación y características.* Créase un sistema con medidas de promoción para locaciones destinadas a vivienda, con las siguientes características:

- a) Incorporación voluntaria y optativa de los contratantes;
- b) Instrumentación por contrato de locación tipificado, obligatorio y registrado según se establezca en la reglamentación;
- c) El plazo mínimo de la locación será de tres años;
- d) Seguro obligatorio de garantía del contrato de locación, con intervención de la Caja Nacional de Alorro y Seguro. El mismo asegurará al locador el cumplimiento de todas las obligaciones del locatario, incluyendo indemnizaciones por supuestos de ocupación indebida o daños causados a la propiedad. Asimismo cubrirá al grupo familiar locatario en los supuestos de fallecimiento del titular, incapacidad total permanente

o temporaria del mismo y en todo caso de gravedad justificada;

- e) El precio de la locación será reajustado trimestralmente según índices de actualización elaborados por el INDEC en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales y rebajados dichos índices en un 20 por ciento no acumulativo;
- f) Las viviendas que podrán incorporarse al sistema deberán ser las comprendidas en las características de común o económica de la resolución 368/76 de la ex Secretaría de Vivienda y Urbanismo;
- g) Los beneficios impositivos que se establecen en los artículos siguientes.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: propongo agregar en la parte final del inciso d) que "la prima será pagada en partes iguales entre el locador y el locatario". Sugiero este agregado porque el texto no especifica quién deberá pagar la prima del seguro.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Ramos. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: de acuerdo con el texto que acaba de ser leído por Secretaría, advierto que en el inciso e) se hace referencia a las estadísticas elaboradas por el INDEC. Para guardar armonía con modificaciones aceptadas por la comisión en relación con artículos anteriores, propongo que en el citado inciso se disponga que los precios de las locaciones se reajustarán de acuerdo con las estadísticas oficiales elaboradas por los organismos competentes de la Nación y de las provincias.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Ramos. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Pugliese). — Sería conveniente aclarar cómo quedan redactados los incisos cuyas modificaciones han sido aceptadas por la comisión.

Sr. Stolkiner. — Se repite el texto anterior en esa parte.

Sr. Presidente (Pugliese). — Hay dos proposiciones: una del señor diputado Arabolaza y otra del señor diputado Stolkiner.

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: puedo repetir el agregado para que se tome nota por Secretaría. En el inciso d), en la parte final se

agrega lo siguiente: "La prima será pagada en partes iguales entre el locador y el locatario".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La propuesta del señor diputado Stolkiner a qué inciso se refiere?

Sr. Stolkiner. — Al inciso e), señor presidente.

Sr. Terrile. — En el inciso e) se establece que el precio de la locación será reajustado trimestralmente con los índices de actualización elaborados o que publican oficialmente los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias. Concretamente diría así: "El precio de la locación será reajustado trimestralmente según índice de actualización elaborado oficialmente por los institutos de estadísticas y censos de la Nación y de las provincias en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales y rebajado dicho índice en un 20 por ciento no acumulativo".

Sr. Arabolaza. — Señor presidente: como este artículo puede dar lugar a varias interpretaciones, con respecto a la aplicación de la indexación correspondiente, solicito al señor miembro informante que dé una explicación lo suficientemente esclarecedora para que sirva luego para la interpretación correcta de la disposición que se ha elaborado, contenida en el inciso e) del artículo en consideración.

Sr. Ramos. — Si la Presidencia lo autoriza podría ampliarse el concepto para que quede asentado. Se trata de calcular en cada trimestre el índice acumulado para el ajuste y reducir el valor de ese ajuste en un 20 por ciento; en cada una de las operaciones trimestrales volverá a hacerse lo mismo en forma no acumulativa. Quiere decir que del total resultante se restará el 20 por ciento de atenuación de dicho índice. Creo que así está suficientemente aclarado el aspecto de la redacción, que no se refiere en definitiva al valor anterior sino al total acumulado de la actualización menos el 20 por ciento aquí indicado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Deseo proponer una modificación al inciso d) referida al establecimiento del seguro obligatorio de garantía del contrato de locación con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. En realidad no es necesario que una operación tan sencilla en el mundo como es el seguro esté sujeta al monopolio estatal.

Por ello solicitamos a la comisión que se elimine esa exclusividad.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Ramos. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 10 propuesto por la mayoría de la comisión con las modificaciones que ha aceptado.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 11.

Por Secretaría se dará lectura a la nueva redacción propuesta por la mayoría de la comisión.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 11. — Beneficios impositivos. Quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley realicen inversiones en inmuebles con características de vivienda común o económica, que se destinen a locación de vivienda familiar permanente, o incorporen viviendas de estas características al presente régimen de promoción, gozarán de los beneficios impositivos que en cada caso se establezcan.

Para la calificación de vivienda común o económica a la que se hace referencia en la presente ley, deberá atenderse a las disposiciones de la resolución 368/76 dictada por la ex Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 11 conforme al texto propuesto por la mayoría de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 12.

Por Secretaría se dará lectura del nuevo texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 12. — Destino de las inversiones. Para gozar de los beneficios impositivos a que se refiere el artículo precedente en materia de inversiones deberán cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Las inversiones deberán destinarse a:

1. La construcción de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
2. La terminación de unidades de vivienda y su infraestructura que se encuentren en construcción a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las mejoras necesarias para poner en condiciones de habitabilidad el inmueble, realizadas a partir de dicha fecha.
3. La compra de unidades de vivienda concluidas o en construcción al momento de entrar en vigencia esta ley, y siempre que dichas viviendas no hubieran sido afectadas a los beneficios del presente régimen o hubieran gozado de los conferidos por la ley 21.771.

b) Las unidades de vivienda comprendidas en el inciso a) precedente deberán destinarse a la locación de vivienda familiar permanente, acreditándose tal destino mediante contratos de locación celebrados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 13.

Por Secretaría se dará lectura del texto que propone la mayoría de la comisión.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 13. — Beneficios. Los beneficios a que se refiere el artículo 11 para el caso de inversiones en inmuebles son los siguientes:

a) En la liquidación del impuesto a las ganancias podrán deducirse:

1. Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio fiscal en la construcción de nuevas unidades de vivienda y su infraestructura, excluido el valor del terreno.
2. Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio fiscal para la terminación de las construcciones de vivienda y su infraestructura, excluido el valor del terreno, y para la realización de las mejoras contempladas en el artículo 12, inciso a), apartado 2.
3. Las sumas efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal correspondiente en la compra de unidades de vivienda sin uso, excluido el valor del terreno, que se formalice fehacientemente a partir de la vigencia de esta ley. En el caso de viviendas en construcción, adquiridas para su terminación, dicha deducción no obstará a la prevista en el apartado 2 precedente, respecto de las sumas que se inviertan para la terminación de las unidades de vivienda y su infraestructura.

A los fines precedentes, cuando el precio de la compra se refiera indiscriminadamente al valor del terreno y a las mejoras, la parte del mismo atribuible a estas últimas se fijará teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal vigente al momento de la adquisición. Si se desconociera dicho avalúo o el mismo no discriminara los valores relativos a la tierra y a las mejoras, se presumirá, salvo prueba en contrario, que estas últimas representan el sesenta y seis por ciento (66 %) del precio de compra, proporción que se elevará al ochenta por ciento (80 %) en el caso de inmuebles comprendidos en el régimen de la ley 13.512 y sus modificaciones, de propiedad horizontal.

No se encuentran comprendidos en este apartado los inmuebles que hubiesen sido

afectados a los beneficios de esta ley o que hubieren gozado de los conferidos por la ley 21.771.

Las sumas deducibles serán las invertidas en la compra de los inmuebles y en su caso, en la adquisición de los bienes y en la locación de los servicios que conforman el costo de la edificación, su infraestructura y los honorarios profesionales.

A los fines indicados en este inciso se entenderá por infraestructura a todas aquellas obras que, sin formar parte de las unidades de vivienda, estén destinadas a hacer posible el suministro de los servicios públicos de provisión de agua, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas y teléfono, como asimismo el acceso a las unidades de vivienda.

No se considerarán como infraestructura los edificios y lugares destinados a la industrialización o comercialización de bienes o servicios y construcción de caminos que no sean calles urbanas.

- b) En el impuesto a las ganancias, exención de la ganancia neta originada en la locación de las unidades.

Al respecto no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo *in fine* del artículo 73 de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones;

- c) En los impuestos sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, el valor impositivo correspondiente a las unidades de vivienda, terminadas o en construcción, no será considerado activo ni bien computable, respectivamente, a los efectos de la liquidación de dichos gravámenes, no dando lugar al prorrato del pasivo o de deudas que pudieran corresponder;
- d) En el impuesto de sellos quedan exentos los contratos de locación de los inmuebles, sus prórrogas y cesiones o transferencias;
- e) En el impuesto al valor agregado, los saldos de impuesto provenientes de nuevas unidades de viviendas y su infraestructura quedan excluidos de la limitación prevista en la primera parte del artículo 13 de la ley respectiva.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 14.

Por Secretaría se dará lectura del nuevo texto propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 14. — Facultades de reducción o extinción. Facúltase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico Sur, para reducir o eximir del pago de sus tributos sobre las unidades de vivienda que se afecten al presente régimen de promoción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 15.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la mayoría de las comisiones.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 15. — Otros beneficios tributarios. Quienes a partir de la vigencia de la presente ley afecten inmuebles con características de vivienda común o económica no comprendidos en el inciso a) del artículo 12 a locación de vivienda familiar permanente gozarán de los beneficios impositivos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 13. Tratándose de unidades nuevas y sin uso, podrán asimismo gozar:

- a) De una deducción en la liquidación del impuesto a las ganancias del 25 por ciento de las sumas efectivamente invertidas en su construcción o compra, excluido el valor del terreno con más la actualización que correspondiera calculada conforme lo establezca el Poder Ejecutivo nacional, resultando de aplicación las previsiones de los párrafos segundo y siguientes del apartado 3 del inciso a) del artículo 13;
- b) Del beneficio a que se refiere el inciso e) del artículo 13.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 16.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 16. — Requisitos para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 13 y 15. Para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 13 y 15 precedentes se requiere:

- a) Las unidades de vivienda deberán quedar ocupadas a título de locación efectiva por un período mínimo de setenta y dos meses consecutivos o alternados, en lapsos no inferiores a treinta y seis meses dentro del término de ocho años contados a partir de la formalización del primer contrato de locación de cada unidad;
- b) El primer contrato de locación deberá formalizarse dentro de los 120 días posteriores a aquel en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la compra de los mismos, y tratándose de los comprendidos en el artículo 15, aquel de entrada en vigencia de la

- presente ley, excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en que el plazo se computará a partir de su efectiva desocupación;
- c) Los arrendamientos deberán instrumentarse mediante un contrato de locación tipificado, obligatorio y registrado según se establezca en la reglamentación;
- d) El precio de la locación será reajustado trimestralmente según el índice de actualización elaborado por el INDEC, en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales y rebajado dicho índice en un veinte por ciento (20 %) no acumulativo;
- e) Seguro obligatorio de garantía del contrato de locación, con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, con las características referidas en el inciso d) del artículo 10 de la presente ley;
- f) Las construcciones desgravables deberán estar en condiciones de habitabilidad dentro del plazo de cuatro años posteriores al acogimiento de los beneficios del presente régimen de promoción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Deseo aclarar que, siguiendo la correlación de las modificaciones introducidas a propuesta del señor diputado Stolkiner, en el inciso d) se debe establecer que el precio de las locaciones deberá ser reajustado trimestralmente según índices de actualización elaborados por los institutos de Estadística y Censos de la Nación y de las provincias.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Solicito un agregado al inciso d) de este artículo. Es el siguiente: "La actualización en ningún caso será superior al índice de aumento de los salarios para el mismo período".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto?

Sr. Ramos. — Debemos considerar que tal vez el salario no sea la variable que más convenga al inquilino. Si se establece como tope sería mucho más claro decir que la actualización se haría sobre la base de la variación de los salarios, porque si no se puede superar no tiene sentido hacerlo de otra forma.

Entiendo que la comisión debe mantener el criterio original.

Sr. Arabolaza. — Creo que el mecanismo utilizado por este inciso con el agregado que he propuesto puede dar una respuesta más adecuada que la que se logra en función de los incrementos de los salarios, ya que si se cumplen las premisas establecidas en el sentido de que el salario real se verá aumentado en nuestro

país —sería una circunstancia feliz, por supuesto—, el mecanismo utilizado según el inciso d) resultaría menos conveniente para los inquilinos.

Interpreto que la idea contenida en dicho inciso —tal como lo aprobó la comisión— desde ningún punto de vista crearía perjuicios si se estableciera que, a modo de resguardo o garantía, el índice promediado no debe superar al de crecimiento de los salarios.

Es decir que estaríamos aprovechando un doble resguardo que no perjudica en nada el fin de este proyecto y, al mismo tiempo, estableceríamos una cláusula de garantía.

Sr. Rabanal. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — Señor presidente: el tema de cuál será el índice que sufra un mayor incremento porcentual depende de las cambiantes circunstancias de nuestra economía. En algún momento se aprovechó una ficticia estabilidad de la moneda estadounidense y muchas operaciones y contratos se vincularon con la evolución del dólar, ya que estaba regulado por una "tablita". Eso fue así hasta que se produjo la explosión de la cotización de esa moneda que modificó las pautas que presuntamente eran beneficiosas.

Luego, los incrementos salariales y fundamentalmente del salario mínimo fueron de tal magnitud que de haberse tomado este índice también hubiese perjudicado a los asalariados. Es decir que este *mix*, esta combinación de índices de precios al consumidor y salarios, se acomoda más a las alteraciones que el mercado puede producir en variables económicas que no siempre se manejan con conceptos de rigidez o de coherencia.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 16 conforme al texto leído por Secretaría, y con la modificación indicada por el señor diputado Baglini, que consiste en sustituir en el inciso d) "según el índice de actualización elaborado por el INDEC" por "según el índice de actualización elaborado por los institutos de Estadística y Censos de la Nación y de las provincias".

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 17.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 17. — Sanción por incumplimiento. De no cumplirse los requisitos previstos en el artículo anterior, el contribuyente deberá reintegrar al ejercicio fiscal en

que tal hecho ocurriera el monto desgravado o exento con su actualización respectiva; dicha actualización deberá calcularse teniendo en cuenta la variación en el índice de precios al por mayor, nivel general, producida entre el mes de cierre de cada ejercicio fiscal en que tuvo incidencia la franquicia y el mes de cierre del respectivo ejercicio fiscal en que corresponda realizar el reintegro, ello sin perjuicio de la aplicación, de corresponder, de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683, texto ordenado en 1978, y sus modificaciones.

En caso de desahectarse el bien del régimen de esta ley, los beneficiarios deberán efectuar los reintegros de los montos desgravados o exentos en la forma establecida precedentemente, resultando de aplicación, de corresponder, las normas de la ley 11.683 citadas en el párrafo anterior.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 18.

Se le dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 18. — Transferencia de unidades. En caso de transferencia de inmuebles afectados al régimen de la presente ley antes de cumplidos los plazos de afectación previstos en el artículo 16 inciso a), ya sea que la misma fuera voluntaria, por ejecución de crédito contra el contribuyente o por causa de muerte del titular, el sucesor podrá continuar a aquél en los beneficios y obligaciones con relación a las prescripciones de esta ley. En este caso, la comunicación de la transferencia deberá efectuarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley, y sólo cumplido este requisito el transmitente quedará desligado de los beneficios y obligaciones relacionados con esta ley.

El ulterior incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte del sucesor hará pasible a éste del reintegro prescrito en el artículo 17 y de la obligación de abonar los gravámenes dejados de ingresar por el o los transmitentes desde el comienzo de la utilización de los beneficios con las actualizaciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones), sin perjuicio de la aplicación, de corresponder, de las normas contenidas en el capítulo VII, título I de la misma ley.

En el caso de que el sucesor no desee continuar acogido al régimen de la presente ley, deberá manifestar, en forma expresa, tal circunstancia al transmitente o hacerla constar en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes en la comunicación a que se refiere el párrafo anterior. En estos casos el transmitente deberá efectuar el reintegro previsto en el mencionado artículo 17 de la presente ley con más las actualizaciones pertinentes, sin perjuicio de la aplicación, en caso de corresponder, de las normas contenidas en el capítulo VII del título I de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 19.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 19. — Limitación. Los beneficios otorgados por esta ley no serán de aplicación respecto de inversiones amparadas por otros regímenes de promoción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 20.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 20. — Régimen impositivo. Serán aplicables, en lo pertinente al régimen impositivo establecido por la presente ley, las disposiciones que determina la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 21.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Artículo 21. — Viviendas deshabitadas. Facúltase al municipio de la ciudad de Buenos Aires y a los del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para fijar gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas.

Sr. Manny. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Señor presidente: deseo proponer un criterio diferente. Esta iniciativa es de dudosa constitucionalidad, pues no parece una reglamentación razonable del ejercicio de usar y disponer de la propiedad que establece el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y viola el principio de igualdad en materia tributaria dispuesto por el artículo 16. En efecto, la categoría de propietario de una vivienda deshabitada es persecutoria y no tiene bases razonables. Teniendo en cuenta que el supuesto que se pretende castigar impositivamente es el de mantener viviendas deshabitadas, encontramos muy difícil poder imaginar un sistema que contemple adecuadamente todas las circunstancias que harían perfectamente justificable esa conducta.

En cuanto al derecho del dueño debemos tener presente que cuando una persona o entidad tiene una vivienda es propietaria de una inversión. Son infinitas las formas en que un individuo o entidad puede invertir su dinero. Discriminar una de esas formas de inversión, como pretende este proyecto, es lisa y llanamente arbitrario. No favorecerá para nada los fines que se buscan.

Asimismo, nos preguntamos quién determina que una unidad no terminada es una vivienda desocupada. Mucha gente no concluye su vivienda por falta de disponibilidad de medios. Es decir que este artículo parece irrazonable desde cualquier ángulo que se lo analice. Consideramos que dejará la puerta abierta a toda clase de litigios. Por lo tanto, resulta en nuestra opinión nocivo y atentatorio contra el derecho de propiedad, razón por la cual solicitamos su supresión.

Sr. Rabanal. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — Señor presidente: el señor diputado Manny cuestiona por inconstitucional esta norma del artículo 21. Este tema de la igualdad ante la ley ya ha sido receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que ha considerado que se trata de "igualdad entre los iguales". Es decir que aquí no se promueve alguna diferencia entre los que tienen viviendas desocupadas o deshabitadas.

Respecto del tratamiento discriminatorio, considero que el Estado tiene derecho a diferenciar categorías en función del interés social. En este momento el interés general presume como categoría mayor la de "vivienda ocupada" para paliar el déficit habitacional y no la vivienda deshabitada que representa, desde todo punto de vista, una conducta antisocial.

Pero quiero transmitirle algo al señor diputado Manny que seguramente llevará tranquilidad a su espíritu: él se pregunta cómo se puede definir el hecho de que una vivienda esté deshabitada o no, ya que plantea el tema de que puede estar en construcción. Las ordenanzas municipales definen perfectamente cuándo una vivienda está en construcción y cuándo está terminada y, por ende, deshabitada. Una vez que se otorgue lo que se denomina certificado final de obra, esa vivienda se encontrará en condiciones de ser ocupada. Por lo tanto, a partir de ese momento existirá la categoría de vivienda desocupada o deshabitada, pudiendo entrar a aplicarse esta ley.

Además, señor presidente, existe un elemento muy importante que no podemos dejar de lado, ya que se trata de un tema trascendental; me refiero al uso del suelo metropolitano.

Muchas veces se habló de la reforma agraria y de los latifundios en materia agropecuaria. Yo creo que el tema de los latifundios urbanos es una de las cuestiones que tendremos que afrontar, ya que impide el crecimiento y mejoramiento de las ciudades, así como el latifundio agropecuario impide el crecimiento económico. En consecuencia, esta disposición del artículo 21 es de un alto interés social, razón por la cual la comisión no ha receptado el criterio del señor diputado Manny.

Sr. Manny. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Señor presidente: quiero manifestar, luego de escuchar los criterios expuestos por el señor diputado Rabanal, nuestra total disidencia con relación a los conceptos de latifundios urbanos y agropecuarios a que se ha referido.

Hemos dicho en más de una ocasión que para resolver el problema de la vivienda deberemos encontrar la manera de inducir fuertes inversiones, que no podrán ser estatales sino de entidades o de individuos que consideren que el área de viviendas es más rentable que otras.

Las medidas que se promueven continúan agregando dificultades y no van a permitir lograr el objetivo que se persigue.

Nuestro bloque ha manifestado reiteradamente su oposición a la forma en que se va disolviendo, poco a poco, el concepto del derecho de propiedad establecido originariamente en la Constitución Nacional, que es por un lado una letra y por otro un espíritu. A medida que tal disolución ha ido ocurriendo, los verdaderos problemas de la Argentina se han ido agravando. La falta de respeto al derecho de propiedad es uno de los causales de nuestra decadencia.

Pese a que sabemos que la bancada mayoritaria no estará de acuerdo con nuestro punto de vista, dejamos categóricamente establecida nuestra oposición a los fundamentos y a la terminología del artículo que estamos considerando.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: mi intervención está destinada a avalar los conceptos vertidos por el señor diputado Rabanal y a agregar algunas consideraciones especiales.

Evidentemente, nuestra bancada no puede compartir la idea y conceptualización del derecho de propiedad que ha expresado el señor diputado Manny. La concepción que sustentamos del derecho de propiedad ha sufrido una transformación a través del tiempo hasta llegar a la función social que debe cumplir. Ello surge no sólo del texto constitucional sino también de las diversas leyes que van reglamentando su ejercicio.

El proyecto que estamos considerando tiene su basamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dispone que la ley establecerá el acceso a una vivienda digna. Esta norma procura asegurar que el habitante de nuestra tierra tenga, por distintos mecanismos, la posibilidad de llegar a habitar una vivienda que satisfaga sus necesidades.

Mediante este proyecto de ley de locaciones urbanas estamos recorriendo el camino de acceso a esa vivienda digna y estamos promoviendo, de alguna manera, la reglamentación de la norma contenida en la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: quiero complementar los conceptos expresados por los colegas de bancada que me han precedido en el uso de la palabra. No es aceptable la afirmación del señor diputado perteneciente al bloque de la Unión del Centro Democrático de que, desde el punto de vista constitucional, el artículo 21 del dictamen constituya una desvirtuación de la facultad de hacer uso de la propiedad.

El concepto de usar de la propiedad no comprende el de abusar de ella. Es decir que si el gobierno entiende que determinada utilización es socialmente disvaliosa, está en su perfecto derecho de reglamentar por ley cuál es la utilización socialmente valiosa, de acuerdo con el concepto moderno que a la función de la propiedad le asigna una doctrina hoy unánime en todos los países adelantados del mundo.

Para justificar nuestra posición bastaría recurrir al artículo 2.513 del Código Civil modificado por el régimen militar gobernante en 1968. En dicho artículo se dice que es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular. Lo que estamos haciendo es delimitar cuál es el ejercicio regular del derecho en materia de locaciones.

Nosotros no podemos tolerar viviendas deshabitadas en estos instantes en que el panorama crítico del mercado locativo nos indica que el Estado debe intervenir para solucionar la cuestión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Bodo. — Señor presidente: indudablemente que el derecho a la propiedad individual tiene sustento constitucional en nuestra Carta Magna. Pero el instituto ha tenido una variación, a lo largo de los tiempos, de la civilización y del desarrollo de las instituciones.

Si aceptáramos la propuesta del señor diputado de la Unión del Centro Democrático tendríamos que retrotraernos a esa concepción de la propiedad que nos habla de la confluencia del *ius utendi*, *ius fruendi* e *ius abutendi*, es decir, que en el ejercicio indiscriminado del derecho de propiedad puede llegarse hasta destruir la propiedad misma, lo que es una incongruencia en la instancia en que vivimos.

Por ello, como se ha dicho recientemente, el Estado tiene la función de contralor del uso normal, adecuado, racional y lógico del derecho de propiedad y no puede permitir en manera alguna que ese derecho se transforme en un absolutismo cavernario, ancestral y filogenético para cercenar derechos sociales que están por encima de los derechos individuales.

De ahí, señor presidente, que considero que la norma propuesta no afecta la concepción actual del derecho de propiedad privada, sino que lo delimita y lo regula para su normal aplicación.

Otro de los puntos que se trajo a colación fue la dificultad o la posibilidad de que se sustenten diversos criterios para determinar cuándo una vivienda está realmente deshabitada. Por ello propongo esta fórmula a la comisión, que entiendo puede ser aclaratoria. Solicito que a continuación de la expresión que dice "para fijar gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas", se agregue el siguiente concepto: "No se considera vivienda deshabitada aquélla que use temporariamente el propietario para el desarrollo de sus actividades propias".

Esto se fundamenta en una situación fáctica que se da en reiteradas ocasiones. Hay muchos propietarios que tienen su departamento en la Capital Federal, pero viven en provincias, y que en el desarrollo de sus actividades comerciales o profesionales necesitan tener una vivienda circunstancial y temporaria en la Capital. Eso se da también en las grandes ciudades, con personas de la Capital Federal que tienen sus negocios o industrias en el interior. Dichos ámbitos de vivienda son utilizados circunstancialmente por los propietarios, pero no constituyen, dentro de la pureza del concepto, viviendas deshabitadas.

De ahí que el problema planteado se solucionaría con el agregado del párrafo mencionado, que dejo propuesto para que la comisión lo considere y lo recepte.

Sr. Presidente (Pugliese). — Antes de solicitar respuesta a la comisión, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — En forma breve señalo que las discrepancias están suficientemente aclaradas y justamente son el objetivo de nuestra intervención en este tema.

La cuestión de la propiedad, tal como nosotros la vemos, está totalmente ligada con el artículo 28 de la Constitución, que como bien sabemos todos dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Por supuesto que, en cuanto al concepto de "ser alterados", va a ser distinto el criterio que sustente la bancada oficialista del que pueda tener nuestro bloque.

Por ahí se ha infiltrado gran parte de esa decadencia argentina y gran parte de lo que terminó siendo hoy en día este aparato productivo argentino, tan dañado y con un proceso inflacionario que es el primero del mundo. Por más que los gobiernos apelen al sentido de patriotismo y al trabajo, la decadencia continúa. De allí que en este tema de la propiedad nos sentiremos muy satisfechos si la diferencia queda tan claramente marcada como lo está aquí.

Agradezco también al señor diputado proponente la introducción que hizo del término "criterio práctico", porque muchas de estas observaciones surgen de lo que ocurre diariamente en el mercado. Para cuando esta ley quede definitivamente sancionada, o incluso antes, gran parte de los actuales departamentos desocupados dejarán de estarlo, porque aun habiendo contratos de por medio sus propietarios van a defender su propiedad y su inversión de lo que nosotros consideramos un avasallamiento legislativo al derecho de propiedad.

No sólo eso; incluso aparecerán consumos verdaderos y auténticos de gas y electricidad, porque la gente se va a proteger de lo que a juicio del bloque de la Unión del Centro Democrático representa un avance sobre el derecho a la propiedad, que nosotros consideramos mucho más rigidamente que el bloque de la mayoría.

De todas maneras, creo que las posiciones han quedado claras.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado Bodo?

Sr. Terrile. — Señor presidente: la comisión no acepta el criterio sustentado por el señor diputado Bodo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 21 conforme al texto del que se ha dado lectura por Secretaría.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 22.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 22. — *Adhesión.* Se invita a las provincias a instrumentar beneficios tributarios, para promover locaciones destinadas a viviendas y establecer gravámenes diferenciales a las viviendas deshabitadas.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 23.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 23. — *Subsidio.* Dispónese que a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo de 180 días, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Acción Social, arbitrará los medios conducentes a fin de subsidiar a los grupos familiares desalojados en dicho lapso que, careciendo de medios económicos, los requiriesen para solucionar su situación habitacional. Dicho subsidio podrá ser solicitado por el grupo familiar que acredite sentencia de desalojo fundada en las causales de falta de pago o de vencimiento de contrato, con orden de lanzamiento, siempre que se trate de vivienda común o económica según lo establecido por la resolución 30.8/76 de la ex Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.

Los ingresos del grupo familiar peticionante en su conjunto no deberán superar un promedio mensual de tres salarios mínimos, cubriendo el subsidio los gastos del nuevo alojamiento hasta un máximo de cuatro salarios mínimos.

Sr. Arabolaza. — Pido la palabra para proponer una modificación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Estimo que el monto del subsidio propuesto puede ser considerado insuficiente, por lo que debe extenderse a seis salarios mínimos en lugar de cuatro.

Es probable que exista un período más o menos prolongado de tiempo entre la fecha de sentencia de desalojo y la concreción de la posibili-

dad de acceder a una vivienda de los planes del FONAVI, a la que se da preferencia por este proyecto. Es por ello que solicito que el monto del subsidio se eleve al equivalente a seis salarios mínimos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ramos. — La comisión no acepta la modificación propuesta, a pesar de que reconoce la importancia del tema. Ello, por cuanto a la vez debemos atender simultáneamente a la provisión de fondos que se requieren para hacer posible el subsidio.

Cuando se lo fijó en el monto de cuatro salarios mínimos atendimos al costo que implica alquilar nuevamente. Se consideró en este caso que siendo el alquiler mensual equivalente a un salario mínimo, el subsidio alcanzaría así para pagar el anticipo, el depósito y el primer mes de locación.

Tal vez pueda resultar exigua la cifra, pero es lo máximo que los cálculos presupuestarios nos permiten admitir.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 24.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 24. — Declaración a los efectos del artículo 7º de la ley 20.221. Las erogaciones que se efectúen en cumplimiento del artículo anterior se considerarán según corresponda, inversiones, servicios, obras y/o actividades de interés nacional, a los efectos del segundo párrafo del artículo 7º de la ley 20.221 y sus modificaciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 25.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 25. — Modificación artículo 4º de la ley 22.916. Sustitúyese por el término de seis meses, contados a partir del mes siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, el primer párrafo del artículo 4º de la ley 22.916, por el siguiente:

El producido de los presentes gravámenes será destinado:

- a) Noventa por ciento (90 %) a atender las erogaciones de carácter extraordinario que demanden las zonas afectadas por las inundaciones producidas durante el año 1983 en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe;

- b) Diez por ciento (10 %) a atender los subsidios previstos por el artículo 23 de la ley de promoción de locaciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Aclaro que el texto definitivo del artículo 25 que propone la mayoría de las comisiones es el siguiente: "Modificación al artículo 4º de la ley 22.916. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 4º de la ley 22.916, por el siguiente: el producido de los presentes gravámenes será destinado: a) noventa por ciento (90 %) a atender las erogaciones de carácter extraordinario que demanden las zonas afectadas por las inundaciones producidas durante el año 1983 en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; b) diez por ciento (10 %) a atender los subsidios previstos por el artículo 23 de la ley de promoción de locaciones".

Sr. Stolkiner. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: la lectura que acaba de hacer el señor diputado modificando la que se ha dado por Secretaría implica, en definitiva, que no se fija término para la imputación de los ingresos resultantes de las penalidades impuestas por este proyecto. El 90 por ciento de los mismos está destinado a partidas previstas en la legislación existente para atender el problema derivado de las inundaciones en las provincias del litoral.

Solicito que la comisión fije un término a esa imputación, porque las inundaciones ya se han producido y las reparaciones llevarán uno o dos años. Dejo librado ese aspecto al criterio de la comisión, pero aclaro que transcurrido ese término no podemos prolongar *sine die* la imputación de los ingresos por inundaciones que habrán sido superadas.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ramos. — Señor presidente: la ley 22.916 fija un gravamen transitorio cuyo vencimiento se opera el 31 de diciembre del corriente año. Por eso hemos retirado el plazo de seis meses, que vence con posterioridad a la fecha establecida por la citada ley.

Por lo tanto, mantenemos el criterio de la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: habida cuenta de que la provincia de Jujuy ha sido declarada en estado de emergencia a raíz de las inundaciones, solicito que también se contemple el caso de esta provincia.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Rabanal. — Señor presidente: de aceptar la solicitud de la señora diputada estaríamos reformando una ley que no se encuentra en tratamiento.

La modificación tiene por objeto obtener un financiamiento genuino para el subsidio previsto en el artículo 23 del presente proyecto de ley de locaciones urbanas.

En consecuencia, si por esta vía agregáramos otra provincia a las ya incluidas dentro del artículo 4º de la ley 22.916, tendríamos que hacer un relevamiento de los fenómenos producidos en otras provincias, como el caso del Chubut o de alguna otra ubicada en el sur y que en este instante se encuentran sufriendo consecuencias graves derivadas de distintos fenómenos, lo cual está fuera de la filosofía que inspiró la sanción de la ley 22.916.

Por ello considero que no debe ser receptada la preocupación de la señora diputada Guzmán, sin perjuicio de que por otra vía el Poder Ejecutivo acuda en auxilio de aquellas provincias que han sufrido ese tipo de fenómeno meteorológico.

Además, quiero agregar otro concepto a la argumentación del señor diputado Ramos, en el sentido de que los fondos que se recaudan mensualmente por aplicación de la ley 22.916 están en el orden de los 12 millones de dólares. Quiere decir que el 10 por ciento que se incluye como aporte al subsidio previsto por la ley de promoción de locaciones que estamos considerando y que durará seis meses, es lo requerido para afrontar las obligaciones que habrá que subsidiar.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quisiera saber, entonces, cuál es la filosofía que se va a seguir a fin de atender a las provincias que han sufrido idéntico problema.

Sr. Rabanal. — No hemos incluido ninguna otra provincia.

Para su información, voy a dar lectura al artículo 4º de la ley 22.916, para que advierta que en su primer párrafo no se halla incluida ninguna otra provincia:

“El producido de los presentes gravámenes será destinado a atender las erogaciones de carácter extraordinario que demanden las zonas

afectadas por las inundaciones producidas durante el año 1983 en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.”

Es decir que la finalidad de esta ley de facto de 1983 es atender los gastos que ocasiona afrontar en las zonas afectadas las consecuencias de las inundaciones.

Lo que estamos haciendo aquí es tomar fondos ya dispuestos por los gravámenes de emergencia a los premios de juegos y sorteos y a los de concursos deportivos.

Sra. Guzmán. — No encuentro ninguna objeción para que en ese aspecto se pueda modificar el artículo 4º de esa ley de facto y en este artículo 25 se contemple la necesidad de la provincia de Jujuy.

Sr. Manny. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Después de haber escuchado los brillantes conceptos vertidos sobre la moneda de curso legal, deseo manifestar mi sorpresa por el hecho de que un señor diputado haya mencionado una cifra en dólares.

Sr. Rabanal. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — He escuchado atentamente esta disquisición del señor diputado Manny y quiero señalar que no hice tal referencia porque se tratara de una moneda de curso forzoso, sino para facilitar la comprensión de los señores diputados. Hice la conversión porque es algo que tendremos que efectuar al momento de la efectiva utilización, según la cotización del día en que se aplique. El rendimiento a la fecha —me refiero al mes de junio—, según las consultas efectuadas en su oportunidad, es el que he señalado. El requerimiento estimado para este subsidio está en el orden de los doscientos cincuenta millones de pesos argentinos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 25 conforme al texto del que ha dado lectura el señor diputado Baglini en nombre de la mayoría de las comisiones.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 26.

Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 26. — De la prioridad de los planes de vivienda. Dispónese que durante los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente

ley, tendrán preferencia de venta y adjudicación sobre los planes de viviendas que realice el Estado nacional a través del FONAVI, los grupos familiares desalojados desde el 10 de diciembre de 1983 y hasta el vencimiento del plazo dispuesto anteriormente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Arabolaza. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — Propongo agregar un nuevo artículo, que tendría que ser el número 27 si la Cámara decide su inclusión. Quiero hacerlo ahora antes de que se dé lectura y se considere el actual artículo 27, porque luego tendríamos que reconsiderarlo en cuanto al número que debería llevar a efectos de un adecuado ordenamiento legal.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia iba a indicar que por Secretaría se diera lectura de la propuesta de inclusión de un artículo 27 que oportunamente presentara el señor diputado.

Por Secretaría se dará lectura de dicha propuesta.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 27. — Locación encubierta. Dispónese que los inmuebles que carezcan de autorización, permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes, otorgado por la autoridad administrativa competente, para la explotación de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de establecimiento asimilable, no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación, considerándose las relaciones existentes o futuras con sus ocupantes, locación, debiendo regirse en lo sucesivo por las normas en vigencia en esta última materia.

Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones existentes o futuras en aquellos establecimientos comerciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto administrativo o la sentencia judicial correspondiente que determine el retiro de dicha autorización comercial.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Arabolaza. — ¿Me permite, señor presidente? Tengo que hacer algunas consideraciones...

Sr. Presidente (Pugliese). — Le iba a dar la palabra después, señor diputado.

Sr. Arabolaza. — Pero quisiera realizar algunas aclaraciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra, señor diputado.

Sr. Arabolaza. — En el seno de la Comisión de Vivienda este tema de los ocupantes de hoteles residenciales y casas de pensión ha merecido la consideración de los partidos Justicialista e Intransigente y también de los diputados del partido radical. Asimismo, ha motivado la presentación en esta Cámara de algunos proyectos de declaración mediante los que se solicitaba la intervención del Poder Ejecutivo para terminar con las situaciones que se vienen produciendo en grandes ciudades y que perjudican a sectores muy modestos de nuestra población. Estas personas ocupan las casas de pensiones y hoteles residenciales que muchas veces constituyen una forma encubierta de locación.

En las ordenanzas municipales —no voy a ocupar el tiempo de la Cámara en leer los decretos que regulan las características que deben tener los hospedajes, hoteles residenciales y casas de pensión— se legisla perfectamente sobre este tema, pero existen dos situaciones que nos preocupan. En primer lugar, aquellos establecimientos que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, verdaderos conventillos que la gente sin recursos debe forzosamente habitar como seudopensiones u hoteles. En segundo término, aquellos lugares que habiendo obtenido la habilitación correspondiente, por medio de la no prestación de los servicios que corresponden de acuerdo con las reglamentaciones respectivas colocan a sus ocupantes en situación de verdaderos inquilinos.

Por eso entendemos que la ley debe encarar estas situaciones de real injusticia que llevan a numerosas familias a situaciones de indefensión. Es así que he propuesto a la consideración de la Cámara la inclusión de este nuevo artículo para los casos en que la autoridad municipal retire la autorización para funcionar a esos establecimientos de pensiones u hoteles, y en ese caso sus ocupantes se vean garantizados e incluidos en el régimen de locaciones. De la misma forma, la medida alcanzará a los ocupantes de aquellos establecimientos que no hubieran cumplido con las disposiciones de habilitación municipal y no posean la autorización final respectiva.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado Arabolaza?

Sr. Terrile. — Sin perjuicio de los fundamentos vertidos en el día de ayer durante la consideración en general, y con el espíritu con que lo ha planteado el señor diputado Arabolaza, la comisión va a aceptar la inclusión del artículo 27.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Simplemente quiero manifestar el apoyo de los partidos provinciales a la inclusión de este artículo en el proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: comparto el propósito que anima la inclusión del artículo propuesto por el señor diputado Arabolaza, aunque su rápida lectura —justificable en razón de la necesidad de medir el merituable tiempo de esta Honorable Cámara— y el hecho de que no tenga el texto sobre mi banca me impide, tal vez, hacer un análisis exhaustivo y profundo.

De cualquier manera voy a votar en contra de la proposición aceptada por la comisión. Hemos vivido en el país una época prolongada durante la cual la estructura fundamental de la República y su columna vertebral, desde el punto de vista jurídico, es decir la Constitución Nacional, fue ignorada una, otra y mil veces. Tenemos que restaurar las instituciones y ello significa respetar la Constitución.

La proposición del señor diputado Arabolaza incursiona en una materia privativa de las provincias y los municipios. En efecto, de los artículos 104 y 105 de la Constitución Nacional se desprende que los estados federales conservan su autonomía y todas las facultades no delegadas al poder central. La municipalidad —se ha dicho repetidamente— es la célula madre de la democracia, el núcleo dentro del cual se aplican los principios de los que después emerge la vitalidad republicana.

A mi juicio constituye una lesión a los principios constitucionales que he mencionado limitar en cualquier forma lo que es inherente al poder comunal, tal como la reglamentación de qué casas son residencias, cuáles hoteles o en qué circunstancias se debe dar una determinada habilitación. Habrá que buscar quizás una redacción —emplearé un término que espero no moleste al señor diputado, cuya inquietud comparto— más feliz para tipificar esos establecimientos encubiertos sin lesionar las facultades comunales, de manera de proteger a los habitantes de esos inmuebles que poseen una calificación indebida, pero en la cual no podemos incursionar porque se trata de una facultad de las respectivas municipalidades. En la forma en que está redactada la proposición, y por los fundamentos que he dado, me opondré formalmente a su aprobación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arabolaza. — De la simple lectura del artículo que he propuesto se desprende que la

autoridad de aplicación es la local y que queda bajo su arbitrio y jurisdicción la tipificación de las características que han de recibir estos establecimientos para ser o no considerados de hospedaje. De manera que mi propuesta no vulnera desde ningún punto de vista los principios constitucionales.

Le pediría al señor diputado preopinante que relevara el texto del artículo puesto que a primera vista puede conducir a una impresión que, le aseguro, es incorrecta. Es decir que si en un caso particular no existe una denegación de la habilitación solicitada por el dueño del establecimiento o resolución de la autoridad de aplicación que la revea con carácter firme, o una sentencia judicial, esta disposición no surtirá efectos para ese supuesto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la inclusión del artículo propuesto por el señor diputado Arabolaza y aceptado por la mayoría de la comisión, que se incorporaría como artículo 27.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 27 del dictamen, que pasaría a ser 28. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 28. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 28 del dictamen, que pasaría a ser 29. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Artículo 29. — Vigencia. Las disposiciones que se establecen en la presente ley son de orden público, rigiendo a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Los beneficios impositivos que ella establece producirán efectos respecto de inmuebles que se acojan al régimen de promoción impositiva antes del 31 de diciembre de 1986, con la salvedad de que los beneficios previstos por los incisos b), c) y d) del artículo 13 tendrán efecto por el término de afectación del inmueble al régimen promocional y los de su inciso e) los producirán incluso retroactivamente cuando los saldos a favor a que alude surgieran en ejercicios cerrados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, haciéndose extensiva esta salvedad al artículo 15.

El Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar el vencimiento del plazo fijado para acogerse a los beneficios impositivos de la presente ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 29 del dictamen, que pasa a ser 30, es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado.

5

MOCIONES

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: formulo moción de que se levante la sesión y se postergue para la próxima sesión de tablas el tratamiento de los asuntos pendientes de consideración incluidos en el plan de labor que fuera oportunamente aprobado.

Sr. Balestra. — Si me permite el señor diputado, le solicitaría que postergue por unos instantes la moción que acaba de formular a efectos de poder hacer una moción de vuelta a comisión respecto de uno de los asuntos pendientes de tratamiento.

Sr. Jaroslavsky. — No tengo inconveniente, señor diputado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Balestra. — Señor presidente: formulo moción de vuelta a comisión para el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice (Página 2116.)

y de Energía y Combustibles — contenido en el Orden del Día N° 213 — en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía.

El fundamento de este pedido se basa en la redacción del artículo 3º, inciso a) del citado convenio, en el que estaría en juego el mecanismo de la consulta previa para el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos. Recuerdo a la Honorable Cámara que la disposición a la que acabo de aludir fue motivo de que un proyecto similar a éste no fuera sancionado por el Congreso Nacional en el último período constitucional 1973-1976.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado por Corrientes.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: reitero la moción de orden que formulara anteriormente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos en el sentido de que se levante la sesión y se postergue para la próxima sesión de tablas el tratamiento de los asuntos pendientes de consideración.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda levantada la sesión.

— Es la hora 23 y 10.

LORENZO D. CEDROLA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

6

APENDICE

SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

1

Buenos Aires, 5 de julio de 1984.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha considerado en sesión de la fecha el mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley de protección del orden constitucional y de la vida democrática, que tuvo su origen en esta Honorable Cámara y que fuera sancionado con

modificaciones por ese alto cuerpo, y ha tenido a bien aceptar algunas de ellas y rechazar otras, quedando sancionado de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

NORMA DEROGATORIA Y DISPOSICIONES PENALES

Artículo 1º — Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10, 11 y 12 de la ley 20.840, y las leyes de facto